

Santiago, tres de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, la Ministra en Visita Extraordinaria, doña Paola Plaza González, con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Luis Alberto Medina Aldea, en calidad de autor del delito de torturas, cometido en la persona de don Rubén Antonio González Tarifeño, en la ciudad de Rancagua, en fecha indeterminada en el mes de octubre de 1973, a sufrir la pena efectiva de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio.

Impugnada dicha decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso presentado por el sentenciado, procedió a confirmar la misma.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujo el recurso de casación que pasa a examinarse, respecto del que se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que en el considerando tercero del fallo de primer grado se fijaron los hechos objeto de juzgamiento:

a) Que, el día 11 de septiembre de 1973, se decretó Estado de Sitio en todo el territorio de la República de Chile y Estado de Emergencia en las provincias y departamentos del país. En aquella época en la entonces Provincia de O'Higgins, se designó para cumplir las funciones de Jefe e Intendente al Coronel de Ejército Cristián Ackernel San Martín, hoy fallecido, quien de prestar



labores directamente en el Regimiento de la ciudad y organizó una oficina de informaciones en dependencias de la antigua Intendencia de Rancagua, ubicada en la plaza principales de esa ciudad. Asimismo y por instrucción directa del citado Coronel, se constituyó al interior de ese recinto la Fiscalía Militar, quedando al mando del Capitán de Ejército Bruno Enriotti Zuleta, fallecido;

b) Así las cosas, se estableció un servicio de inteligencia en la ciudad de Rancagua integrado a lo menos por dos funcionarios de Investigaciones, de apellido Acevedo y Fagalde, ambos fallecidos, y por el entonces Teniente de Ejército Luis Alberto Medina Aldea, quien se dedicaba a identificar e interrogar a las personas detenidas por asuntos políticos. Para ello fue relevado temporalmente de sus funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña N°22 Lautaro con el objetivo de desempeñar labores de manera exclusiva en la Fiscalía;

c) A partir del mes de septiembre de 1973 este servicio de inteligencia comenzó a realizar diversas actividades y operativos en la zona. Producto de ello el querellante de autos, Rubén Antonio González Tarifeño, militante del Partido Socialista, quien trabajaba como ayudante mecánico en la Empresa de Aceros INDAP, en la sucursal de Rengo, y además Presidente del Sindicato de Obreros entre los años 1971 y septiembre de 1973, alrededor de las 12 horas, se presentó de manera voluntaria ante el Jefe de Plaza del Ejército de la Gobernación de Rengo, quien le informó que debía quedar detenido en virtud de un Bando existente y que sería trasladado bajo custodia policial hasta la Cárcel Pública de esa ciudad. Traslado a ese lugar fue puesto en una celda incomunicado, donde permaneció en malas condiciones alrededor de cinco días, para luego ser llevado



en un bus custodiado por funcionarios de Gendarmería hasta la Cárcel Pública de Rancagua;

d) En el recinto penitenciario permaneció incomunicado alrededor de tres semanas. Posteriormente y habiendo transcurrido alrededor de cuarenta días, es decir en octubre de 1973, junto con otros detenidos fue trasladado en dos ocasiones hasta la Fiscalía Militar de Rancagua, donde funcionaba la ex Intendencia Regional de esa ciudad, lugar en fue recibido e interrogado por un Oficial del Ejército de Chile, quien estaba acompañado por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, los que al mismo tiempo y ante la respuesta negativa de la víctima en el sentido que en la empresa INDAP no se escondían armas, el funcionario del Ejército comenzó a darle golpes con un palo de goma en varios partes del cuerpo, así como también de puños y pies, mientras que los funcionarios participaban de los actos de violencia física y psicológica. Una vez terminado el interrogatorio fue regresado a la Cárcel de Rancagua en visible mal estado de salud. En el mes de noviembre de 1973, la víctima recuperó su libertad. Luego fue relegado a la ciudad de Rosario, donde permaneció con control de firma diaria y control presencial en su domicilio;

e) Que producto de las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido en la Fiscalía Militar de Rancagua, Rubén González Tarifeño perdió la dentadura y debió ser operado de urgencia de la vesícula una vez que salió en libertad.

SEGUNDO: Que, lo anterior, a juicio de la sentencia de primera instancia, configura la existencia de un delito de torturas y/o aplicación de tormentos a la víctima ya indicada, considerando que el mismo, además, conforma un crimen de



lesa humanidad, en atención a los fundamentos expuestos en la motivación sexta de la decisión de primera instancia, aspecto que se mantuvo en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

TERCERO: Que, por parte de la apoderada del sentenciado Medina Aldea, se dedujo un recurso de casación en el fondo, el cual se hace consistir en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código del Código de Procedimiento Penal, en donde se establece como un vicio de esta clase: *“En que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho, ya sea al determinar la participación que ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena”*.

Al respecto refiere que, en segunda instancia, al confirmar el fallo de primera, se consolidó los yerros cometidos en la etapa de instrucción, en donde existieron errores en torno a la configuración de la participación criminal atribuida al inculcado, pues, conforme lo asegura, existió una confusión respecto del real autor del ilícito investigado, siendo el ejecutor de las acciones el teniente Molina y no su mandante. Así, entiende que, en el proceso, abundan los elementos que confluyen a determinar la autoría del referido teniente y que descartan la de su defendido, siendo un desconcierto atribuido a la similitud existente entre el apellido *Molina* y *Medina*, en circunstancias que su defendido sólo ejecutó las tareas que son propias de quien actuó como secretario de la Fiscalía Militar, las cuales describe.



En este sentido, repasa ciertos testimonios que se tuvieron a la vista en la investigación, de lo cual destaca ciertos pasajes de ellos que, a su juicio, conducen a la duda que se plantea alrededor de la participación atribuida y que, a lo más, sólo permiten castigar a su representado como encubridor de los delitos, de tal manera que en estos aspectos advierte el vicio de casación asociado a la errada determinación de la participación atribuida.

Enseguida, atribuye otros yerros a los fallos de instancia, los cuales radican en el rechazo de la aminorante de responsabilidad criminal prevista en el numeral 9° del artículo 11 del Código Penal, al igual que la decisión de descartar la institución conocida como la *media prescripción*, prevista en el artículo 103 del mismo cuerpo de castigo, todo lo cual incide no sólo en la participación sino que en la pena asignada pues, de haberse reconocido las atenuantes alegadas, debió establecerse una pena menor a la dispuesta en estos autos.

En consecuencia, pide acoger el recurso y que se invalide el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se modifique, precisamente, la participación del sentenciado a la de encubridor, acogiendo las atenuantes que se alegaron en su favor, aplicando una pena final ajustada a derecho de acuerdo con las normas citadas para el efecto y concediendo para su cumplimiento alguno de los beneficios de la ley N° 18.216.

CUARTO: Que, respecto del examen del recurso presentado, en primer término, se advierte un cuestionamiento asociado a la determinación de la participación del inculpado, en donde la principal protesta se relaciona con una suerte de confusión respecto del real autor de los ilícitos imputados, y, en tal sentido, asegura que su defendido sólo podría ser castigado como encubridor de



los ilícitos.

En ese derrotero, la defensa expone ciertos pasajes en donde algunos testigos darían cuenta de una información disímil sobre la autoría de los hechos y que conducirían a una duda razonable respecto del hechor del delito que se investiga. Ahora bien, para que dicha tarea prospere, es menester que exista una revalorización o revisión de los elementos de incriminación que sirvieron de base para determinar ese aspecto del proceso, pues, a la lectura del arbitrio, no se precisa de manera suficiente el cómo se configuraría el vicio que se denuncia, sino que, en realidad, tan sólo se advierte una disconformidad con los razonamientos vertidos a propósito de la participación, los que, por cierto, se basan en elementos de convicción que se detallan en el considerando noveno del fallo de primer grado y que, en el razonamiento siguiente del mismo laudo, permiten conocer los motivos que determinan la actuación criminal atribuida al sentenciado, con lo cual se puede descartar la duda que la defensa propone instalar. Es más, al revisar las razones que se exponen en el fallo respecto de la participación, no cabe sino compartir las reflexiones allí expuestas, descartando así el vicio de casación planteado.

En este caso, necesario resulta destacar las características del recurso de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de Derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el



o los errores de Derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos errores de Derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en el estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De tal forma que, en este extremo de invalidación, el recurso en estudio no podrá prosperar.

QUINTO: Que, aparte de los vicios anotados, cabe aclarar que la denuncia relacionada con la negativa de reconocer el artículo 103 del Código Penal, responde a una decisión que concuerda con el carácter de lesa humanidad asociado al delito investigado en estos autos, cuya naturaleza se contrapone a la institución conocida como la media prescripción y por ello resulta incompatible, pues su aplicación supondría una alteración de los principios generales del Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y las sentencias de dicho Tribunal, confirmadas como tales por resolución unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas 95 (I), de fecha 14 de diciembre de 1946, vigentes al momento de su perpetración y, actualmente, recogidos en el



texto del Estatuto de Roma, afectándose la proporcionalidad de las penas en relación con los delitos de suma gravedad, generando una atenuación a la dosificación punitiva que provoca que la condena de los delitos de lesa humanidad se vuelva irrisoria, atentando contra el principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones de los derechos fundamentales, de tal manera que la decisión de descartar la petición no representa yerro alguno de parte de los sentenciadores de instancia.

SEXTO: Que, además, sobre la aplicación de la circunstancia modificatoria a que alude el artículo 11 N°9 del Código Penal, el recurso incurre en similares desaciertos como aquellos que se vienen describiendo, ya que su ponderación radica en las facultades que detentan los jueces de la instancia, sobre todo porque esta aminorante se vincula con el grado de convicción que los aportes del inculpado generan en el esclarecimiento de los hechos, y es por ello que la norma está redactada en términos amplios, lo que permite una valoración más casuística de aquélla.

En este sentido, la defensa reprocha el grado de sustancialidad de la declaración prestada por el encausado, aspecto que, como dijimos, se vincula a una tarea que está entregada al tribunal de la instancia, el que la evalúa conforme al mérito del proceso, de allí que esta Corte no pueda entrar a revisar el mérito de la valoración en torno al mayor o menor grado de convicción que tuvieron los aspectos planteados por la defensa, lo que coloca al recurso de condiciones de ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación en el fondo, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de un vicio de forma en la



sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyo los fundamentos de aquella que se revisó, con lo cual, obvió el yerro que se constata en lo que se refiere a la aplicación de la ley N° 18.216.

OCTAVO: Que, para estos efectos, resulta relevante lo que dice relación con los motivos que se tuvieron en cuenta para denegar las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad que contempla la Ley. En efecto, el fallo del tribunal de primera instancia, en su punto resolutivo II establece que: *“Por no reunirse los requisitos de la Ley N°18.216 en su redacción vigente a la época de los hechos, al registrar una condena pretérita en su extracto de filiación y antecedentes por simple delito, ni resultar favorable el aludido texto a su nueva redacción, que proscribe las penas sustitutivas para el delito de aplicación de tormentos, no se concederá beneficio alternativo alguno.”.*

En tal sentido, de lo expuesto se precisa que existen tres razones para descartar la procedencia del beneficio alternativo, debiendo ser analizadas las mismas para definir si ello resulta una decisión acertada.

Lo primero, en lo que dice relación con los requisitos de la ley N° 18.216 —pretendidamente vigente a la época de los hechos— y que el encartado incumpliría. Lo cierto es que los sucesos que motivan la condena datan del mes de octubre de 1973, época en que la materia estaba regida por la ley N° 7.821. Dicha normativa limitaba la sustitución a una suspensión en la ejecución de la sanción, en donde se contemplan requisitos más rigurosos a los que, en la actualidad, rigen la materia. La ley N° 18.216, por su parte, establece distintas penas sustitutivas, es decir, amplía las opciones de un cumplimiento alternativo,



razones que llevan a concluir que la actual legislación, en la especie, es una *ley más favorable* a la anterior y por ello que se trata del cuerpo legal aplicable, de conformidad con el artículo 18 del Código Penal.

En este contexto, la ley del ramo establece nuevas alternativas de cumplimiento, entre ellas, la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, la expulsión (en el caso señalado en el artículo 34 de su texto) y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Así, luego de las referidas modalidades, el artículo 1 detalla los delitos en que no procede dicha facultad, por lo cual, corresponde determinar si el ilícito por el que resultó condenado el inculpado se encuentra o no en dicho listado, pues, como se expresa en el fallo de primera instancia, el delito de aplicación de tormentos estaría dentro de ese enunciado y, por tanto, sería improcedente la concesión de las penas sustitutivas, salvo la situación del inciso 8° del artículo 1° de la ley N° 18.216, en donde se permite obviar la prohibición, cuando se le reconozca la cooperación eficaz, cuyo no es el caso de autos.

En este sentido, cabe anotar que el sentenciado resultó condenado como autor del delito de torturas y/o aplicación de tormentos, figura penal establecida en el artículo 150 N°1 del Código Penal, en su redacción vigente a la época de los hechos, en tanto que la prohibición que se viene indicando —en lo atinente a esta causa—, lo conforman los artículos 150 A y 150 B del texto punitivo, siendo ambas figuras penales distintas a la aplicada en estos autos, pues las mismas fueron incorporadas, recién con las modificaciones de la ley N° 19.567, las cuales son posteriores a los hechos luctuosos. De tal manera, no es efectivo que el delito determinado en esta causa, corresponda a una de las hipótesis en que no se



puede ejercer esta facultad, y, por lo demás, en materia penal, está vedada la opción de interpretar por analogía *in malam partem*, de allí que sí existe la posibilidad de aplicar las penas sustitutivas que establece la ley N° 18.216.

NOVENO: Que, sobre lo mismo, otro obstáculo esbozado para la concesión de algún beneficio alternativo, lo conformó la existencia de un antecedente penal pretérito, lo que difiere con el razonamiento décimo noveno del fallo de instancia, en el cual se reconoce la irreprochable conducta anterior del encausado. Ello en el entendido de que los hechos por los cuales ha sido condenado con anterioridad, sucedieron en los meses de septiembre y octubre del año 1973, asumiendo que los mismos pudieron ser investigados de forma conjunta, de modo que el fallo le reconoce la aminorante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, la cual supone una conducta anterior irreprochable de parte del condenado. Así las cosas, queda claro que hay una situación contradictoria en torno a la existencia o no de los antecedentes penales que afectan al sentenciado Medina, pues, por un lado, se le reconoce una conducta anterior intachable, pero, a reglón seguido, se desatiende de esa premisa y, como parte de los argumentos para negar la concesión de penas sustitutivas, se dice que él registra una condena penal anterior, lo que se erige como una contradicción que concreta la conclusión anunciada, en orden a la existencia de un error de forma del fallo de instancia, la cual contiene razonamientos contrapuestos con la decisión, lo que permite concluir que, en ese único extremo, el fallo no ha sido extendido en la forma dispuesta por la ley, conformando con ello un motivo de casación de forma, en particular la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, al no haber sido extendida en la forma dispuesta por la



ley, en relación con el numerando 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, respecto a la exigencia formal de contener los considerandos necesarios relativos a los hechos que fundan o descartan la responsabilidad y extensión con respecto a los procesados así como de su participación, pues, como ha señalado nuestra jurisprudencia: *“... lo que la ley sanciona es la falta de considerandos, ya sea que éstos no existan realmente o que, existiendo, aparezcan contradictorios los unos con los otros en términos que se destruyan o que sean incongruentes con la conclusión, pero la extensión que deba darse a los distintos razonamientos que se formulan respecto a la prueba examinada queda entregada al criterio del tribunal hasta formarse la convicción que se propone adquirir.”* (C. Suprema, 11 de noviembre de 1964. R. t. 61, sec. 4ª, p. 453).

DÉCIMO: Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a Derecho, únicamente en lo que se refiere a la procedencia de la aplicación de la ley N° 18.216, lo cual representa el motivo para proceder de oficio.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y, 775 del Código de Procedimiento Civil,



se **RESUELVE**:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, interpuesto en favor del condenado Luis Alberto Medina Aldea, presentado por su defensa, doña Katerina Gnecco Sandoval, en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos séptimo a décimo, se invalidará de oficio la referida sentencia, únicamente, en la parte indicada en dichos motivos, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Lo anterior, **fue adoptado con el voto en contra del Ministro señor Llanos y el Abogado Integrante señor Gandulfo**, quienes se opusieron al ejercicio de la facultad oficiosa y, en su lugar, estuvieron sólo por desestimar el recurso de casación en el fondo, para lo cual tuvieron en consideración los siguientes fundamentos:

1º) Que, tal como establece el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, podrá obrarse de oficio e invalidar una sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma.

2º) Que, en este caso, tal como se advierte, existe cierta exigencia asociada al recurso, que, por cierto, no se cumple en la especie, pues ni siquiera



hay una mención del capítulo de nulidad que se pretende aplicar de manera oficiosa.

3°) Que, además de lo mencionado, una actuación de oficio como la efectuada, tal como se razona en la decisión de esta Corte, supone, o bien la ausencia de consideraciones, o que existiendo, ellas sean contrapuestas, lo cual no ocurre en la especie. Ello porque la sentencia al dejar constancia de la otra condena que afecta al acusado, no lo hace en términos de la letra b) del artículo 8 de la ley N° 18.216, sino de tener antecedentes personales el condenado relativo a su conducta, de manera pretérita a la declaración de condena, lo que tiene que ver con la causal subjetiva del mismo artículo 8, lo que no se opone a la estimación de la aminorante de irreprochable conducta anterior. Sin perjuicio de lo expuesto y más allá de lo formal, no puede perderse de vista que estamos en presencia de una facultad de parte de los adjudicadores penales, quienes están autorizados para determinar si otorgan o no alguna de las penas sustitutivas que contempla dicho cuerpo normativo, siendo obligados, eso sí, a entregar los fundamentos de su decisión, lo que sí se cumple en el fallo en estudio.

De igual manera, cabe destacar que, otro de los requisitos que contempla la pena sustitutiva del caso, dice relación con la existencia de antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos. En este caso, no existen elementos aportados por la



defensa que permitan tener por acreditados dichos tópicos, lo cual redundaría en la idea que se viene analizando.

Por de pronto, cabe recalcar que esta Corte ya se ha pronunciado sobre la procedencia de un recurso de casación en la materia que se relaciona con las penas sustitutivas y se ha dicho que: *“La declaración del beneficio de la suspensión de la pena, consecuencial a una sentencia condenatoria, no constituye un pronunciamiento integrante de tal fallo, supuesto que recae sobre una situación que es, además, tangencial al juicio, el que tuvo por objeto comprobar la perpetración de un acto punible y establecer la persona responsable para imponer el castigo que resulte ser atinente, o su absolución; y, en esa forma, los pronunciamientos sobre la remisión no podrán tener influencia en lo dispositivo de tales fallos...”*.

4º) Que, en este orden de cosas, los disidentes consideran que es una facultad del tribunal de fondo la concesión o no de una pena sustitutiva y ello no forma una decisión que pueda ser revisable por esta vía, lo que conduce a desestimar el recurso en estudio.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gandulfo y la disidencia por sus autores.

Regístrese.

Rol N°260.511-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr.



Eduardo Gandulfo R. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Llanos, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso y haciendo uso de su feriado legal respectivamente.

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 03/03/2025 15:42:19

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 03/03/2025 15:42:20

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 03/03/2025 15:42:20



En Santiago, a tres de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, tres de marzo de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

Vistos:

De la sentencia recurrida, se reproduce su parte considerativa y, dicho razonamiento pasa a conformar el motivo primero del fallo de reemplazo

De fallo de casación, se reproducen las reflexiones séptima a décima, pasando a conformar los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto de la aludida sentencia de relevo.

Y, teniendo, además, presente:

1º) Que, asentada la procedencia de la ley N° 18.216, teniendo en consideración que el delito por el cual ha resultado condenado corresponde a un *simple delito*, de acuerdo con el artículo 1° de dicho cuerpo normativo, corresponde aplicar, solamente, las penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.

2º) Que, con lo dicho, atento a la penalidad impuesta —quinientos cuarenta y un día—, resulta procedente la reclusión parcial, pues el enjuiciado cumple con los requisitos que establece el artículo 8 de la ley de la especialidad, con lo cual se dispondrá la reclusión parcial nocturna, determinando su encierro en su domicilio, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, por el término de la pena impuesta, tal como se dirá en lo resolutivo.

3º) Que, en este orden de cosas, las reflexiones precedentes permiten descartar el informe fiscal emitido, en aquella parte que propone confirmar el fallo en lo que descarta.



Por estas consideraciones, se **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, escrita a fojas 690 y siguientes, **CON DECLARACIÓN** que, asimismo, reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 8 de la ley N°18.216, se sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de **RECLUSIÓN PARCIAL**, por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye bajo la modalidad de la reclusión nocturna, consistente en el encierro en el domicilio del condenado ubicado en calle Sauvignon N°7889, comuna de Peñalolén o el que se fije en la etapa de cumplimiento, entre las 22 horas de cada día hasta las 06 horas del día siguiente, principiando la ejecución de la pena sustitutiva impuesta una vez que se informe su efectiva implementación por parte de Gendarmería de Chile de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Monitoreo Telemático.

Encontrándose firme el presente fallo, se otorga un plazo de cinco (5) días a la defensa para que acompañe un informe de factibilidad técnica positiva, y proceder al control de la medida sustitutiva mediante el sistema de monitoreo telemático. En la negativa, se resolverá lo que en derecho corresponda.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas, ello según lo resuelva el señor Juez encargado de la ejecución.

En caso de decretar el ingreso efectivo, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y los días que permaneció privado de



libertad en la causa, esto es, entre el día 01 y el 04 de marzo de 2022, según consta de los certificados de fojas 342 y 364, respectivamente.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro señor Llanos y el Abogado Integrante señor Gandulfo, quienes estuvieron por desestimar la concesión de alguna pena sustitutiva, ello en virtud de los fundamentos apuntados en la disidencia planteada en la sentencia de casación, los que han de entenderse reproducidos para estos efectos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°230.511-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Llanos, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso y haciendo uso de su feriado legal respectivamente.

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 03/03/2025 15:42:22

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 03/03/2025 15:42:22

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 03/03/2025 15:42:23



En Santiago, a tres de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

